

## **En riesgo comunidades y personas impactadas por proyectos de desarrollo, revela informe de una coalición global**

*Embargado hasta Junio 24, 2020*

Las inversiones emprendidas en nombre del desarrollo están teniendo un impacto alarmante en la seguridad y el bienestar de las personas y las comunidades que defienden los derechos humanos, revela un [informe](#) de una coalición global integrada por movimientos sociales y organizaciones de derechos humanos. Además, la pandemia de COVID-19 ha generado nuevos riesgos y desafíos para quienes luchan para reivindicar sus derechos, exacerbando problemas relacionados con la violencia, la militarización, la vigilancia y la reducción del espacio cívico.

El informe “[Riesgos no calculados](#)” – obra de la [Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo](#) y la [Campaña Personas Defensoras en el Desarrollo](#) - contiene 25 estudios de casos, que ponen de relieve los graves peligros a los que se enfrentan las personas defensoras en todo el mundo y el papel de los bancos públicos de desarrollo en la exacerbación o mitigación de esos riesgos.

“Las instituciones de financiamiento disponen de una amplia gama de instrumentos y recursos para garantizar que sus inversiones respeten los derechos humanos,” dice el informe. “Sin embargo, con demasiada frecuencia terminan alimentando los abusos de los gobiernos, las empresas y otros actores.”

Por ejemplo en Colombia, el Banco Interamericano de Desarrollo - junto con financistas brasileños, chinos y alemanes – está apoyando el proyecto Hidroituango, una represa de gran magnitud que ha desplazado a miles de personas en una zona plagada de violencia sociopolítica y conflicto armado. Las personas del [Movimiento Ríos Vivos](#) que se han opuesto a la construcción de la presa han sido estigmatizadas, acosadas, detenidas ilegalmente y asesinadas.

“Sin la inversión de los bancos internacionales el desastre social y ambiental que ha implicado Hidroituango no hubiese sido posible,” dijo Isabel Zuleta, líder del Movimiento Ríos Vivos Colombia. “Los bancos son tan responsables como la propia Empresas Públicas de Medellín de la destrucción del Cañón del Río Cauca, de la inundación, avalancha, pérdida de medios de vida y subsistencia, del riesgo de colapso de la presa en el que nos tienen a las comunidades, y de cientos de casos de COVID-19 en la zona. Por lo tanto también es igual su obligación de retirar su inversión, reparar los daños ocasionados y asegurarse de que con su dinero no le sigan destruyendo la vida a la población vulnerable de Colombia.”

A pesar de la pandemia, las actividades extractivas no se han parado. Sin embargo, con la cuarentena los proyectos no pueden tener transparencia ni participación pública, y las personas defensoras no pueden realizar su importante labor de monitoreo y movilización, porque están más aisladas y enfrentando mayores riesgos de vigilancia y ataques. En el tiempo del COVID-19 es aún más imperativo que los bancos de desarrollo conformen sus políticas y prácticas a las leyes, políticas y estándares sobre derechos humanos y conducta empresarial responsable.

Desafortunadamente, con frecuencia las instituciones financieras guardan silencio ante las amenazas y los ataques, sus respuestas son insuficientes o tardías, las personas defensoras y las comunidades quedan desprotegidas y los daños no se reparan.

“A cuatro años del crimen exigimos que se rompa el pacto de impunidad que los protege,” dijo Bertha Zúñiga, integrante del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) y hija de la defensora hondureña Berta Cáceres, asesinada el 2 de marzo de 2016 por su oposición a la represa de Agua Zarca. “Comienza para nosotras la etapa más desafiante de la búsqueda de justicia: procesar y juzgar a los autores intelectuales”.

Los actores que brindan financiamiento para el desarrollo deben garantizar un ámbito propicio para los derechos humanos y la participación, adoptando políticas firmes de salvaguarda de los derechos humanos y prevención de las represalias, asegurando el consentimiento de las partes interesadas y la protección de los espacios para la sociedad civil y la seguridad de las personas defensoras, recomienda el informe.

“El Banco Interamericano de Desarrollo está en proceso de revisión de su marco de políticas sociales y ambientales y debe aprovechar esta oportunidad para integrar los derechos humanos de manera efectiva y transversal dentro de la nueva política y evitar que los derechos humanos sean añadidos como un mero compromiso,” dijo Carolina Juaneda, Coordinadora para la región de América Latina y el Caribe de Bank Information Center (BIC).

A medida que el respeto de los derechos humanos, el ámbito cívico y el estado de derecho se deterioran, también lo hacen las condiciones para el desarrollo. Con contribuciones de grupos de la sociedad civil y defensores/as de todo el mundo, [Riesgos No Calculados](#) rastrea testimonios que dejan en claro que los derechos humanos no pueden ser ignorados en los proyectos de desarrollo.

## Notas

1. Contacto: Lorena Cotza, [Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo](#), [lcotza@rightsindevelopment.org](mailto:lcotza@rightsindevelopment.org), +39 3285761056 (CEST time)
2. Entrevistas con personas defensoras y organizaciones de la sociedad civil, gráficos y fotografías disponibles previa solicitud.
3. El informe *Riesgos no calculados: Amenazas y ataques contra las personas defensoras de los derechos humanos y el papel de los bancos de desarrollo* estará disponible para su descarga el 24 de junio: <https://rightsindevelopment.org/riesgosnocalculados/?lang=es>
4. Webinar: el 24 de junio (10am Bogotá) el informe será presentado en un webinar, con la participación de integrantes de organizaciones de derechos humanos y comunidades afectadas por proyectos de desarrollo. <https://rightsindevelopment.org/news/11991/?lang=es>

## Quiénes Somos

El informe es obra de la **Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo**, una coalición global de 98 movimientos sociales, organizaciones de la sociedad civil y grupos de base quienes trabajan juntos para asegurar que el desarrollo sea liderado por las comunidades para que este respete, proteja y garantice los derechos humanos.

La **Campaña de Personas Defensoras en el Desarrollo** - apoyada por la Coalición para los Derechos Humanos en el Desarrollo - promueve la creación de capacidades y acción colectiva para garantizar que las comunidades y los grupos marginados tengan la información, los recursos, la

protección y el poder para dar forma, participar u oponerse a las actividades de desarrollo y hacer responsables a los financiadores del desarrollo, los gobiernos y las empresas.

El informe incluye casos y contribuciones de: CEE Bankwatch, Plataforma Internacional Contra la Impunidad, Inclusive Development International, Fundar Center of Analysis and Research, Amazon Watch, Protection International, CooperAccion, Karen Environmental and Social Action Network (KESAN), Crude Accountability, El Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), Interamerican Association for Environmental Defense (AIDA), Bank Information Center, Movimiento Xingu Vivo Para Sempre, Heinrich Böll Stiftung, Philippine Movement for Climate Justice (PM CJ), Equitable Cambodia, Business and Human Rights Resource Centre, Nomogaia, Forest Peoples Programme, Movimiento Ríos Vivos Antioquia, International Rivers, Center for International Environmental Law (CIEL), BIC Europe, China-Latin America Sustainable Investment Initiative (CLASII)